

# **Marco jurídico y medidas antiterroristas de la República Popular China**

La Oficina de Información del  
Consejo de Estado de China

Enero de 2024



EDICIONES EN LENGUAS EXTRANJERAS

Primera Edición 2024

*Traducido por Ediciones en Lenguas Extranjeras*

ISBN 978-7-119-13974-6

Publicación:

Ediciones en Lenguas Extranjeras Cía. Ltda.

Baiwanzhuang Dajie No.24, Beijing 100037, China

Distribución:

Corporación China de Comercio Internacional del Libro

Chegongzhuang Xilu No.35, Beijing 100044, China

Apartado postal 399

*Impreso en la República Popular China*

# Índice

Prefacio	1
I. Un marco jurídico mejorado para la lucha antiterrorista	3
II. Disposiciones claras para determinar y castigar las actividades terroristas	11
III. Ejercicio estandarizado del poder en la lucha contra el terrorismo	17
IV. Protección de los derechos humanos en las prácticas antiterroristas	23
V. Protección efectiva de la seguridad del pueblo y la seguridad nacional	32
Conclusión	38



# Prefacio

El terrorismo es un enemigo común de la humanidad, plantea una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y representa un reto para todos los países y toda la humanidad. Todos los miembros de la comunidad internacional comparten la responsabilidad de combatirlo.

Durante décadas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha liderado la elaboración de convenciones y otros instrumentos jurídicos, coordinando los esfuerzos conjuntos de los Estados miembros a fin de combatir el terrorismo y encauzar esos esfuerzos por la vía del imperio de la ley. Uno tras otro, todos los países han respondido al llamado de la ONU, cumpliendo activamente sus deberes internacionales, elaborando y aplicando leyes antiterroristas domésticas y fortaleciendo ininterrumpidamente la cooperación internacional contra el terrorismo. Mediante incesantes esfuerzos, la comunidad internacional ha establecido gradualmente un sistema jurídico institucional de múltiples niveles contra el terrorismo, incluyendo convenciones internacionales y regionales, tratados y acuerdos bilaterales y multilaterales, así como leyes domésticas.

En cuanto víctima del terrorismo, China ha enfrentado por largo tiempo esta amenaza real y siempre ha otorgado gran importancia al fomento del imperio de la ley en el combate antiterrorista. Para ello, el país ha celebrado o se ha adherido a una serie de convenciones y tratados internacionales, ha en-

mendado y perfeccionado sus leyes penales y ha incrementado continuamente su experiencia en el diseño institucional antiterrorista. De cara a la situación actual de las actividades terroristas domésticas e internacionales, China mantiene los esfuerzos por profundizar su comprensión del contraterrorismo sujeto al imperio de la ley, sintetizar los patrones y métodos prácticos para su lucha contra este flagelo, aprender e incorporar las experiencias de otros países, mejorar el marco jurídico antiterrorista, diseñar leyes antiterroristas especializadas, estandarizar y unificar su aplicación y ofrecer garantías legales para el trabajo antiterrorista.

A través de los años, mediante la construcción de un sólido sistema jurídico, la aplicación estricta, estandarizada, justa y civilizada de la ley, así como de la cabal implementación de una administración de justicia imparcial y el fortalecimiento efectivo de las garantías a los derechos humanos, entre otras medidas legales, China ha explorado progresivamente un camino del imperio de la ley para la lucha antiterrorista basado en la realidad del país, uno que ha protegido con vigor la seguridad nacional y pública, así como la vida y la propiedad del pueblo, y que ha contribuido a la seguridad y estabilidad globales y regionales.

# **I. Un marco jurídico mejorado para la lucha antiterrorista**

Desde los años 60 del siglo pasado, bajo el auspicio de la ONU y de sus organismos especializados y organizaciones afiliadas, la comunidad internacional ha elaborado 13 convenciones para la lucha antiterrorista global, lo que revela la postura fundamental del mundo entero en el combate al terrorismo.

Así, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional y de prevenir y sancionar de manera eficaz las actividades terroristas, desde finales de los años 70 del siglo XX, China aprobó el Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de Aeronaves, el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves y el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, entre otros. Además, desde los años 90, en atención a su situación doméstica, los principios constitucionales y las experiencias positivas de la comunidad internacional, el país ha acelerado la construcción de su sistema jurídico institucional para enfrentar el terrorismo doméstico.

— Modificaciones y mejoras a las leyes penales

Las actividades terroristas son consideradas como una conducta criminal grave por parte de la comunidad internacional, y por ello constituyen un punto central de las leyes penales.

En marzo de 1997, la Asamblea Popular Nacional (APN) modificó el Código Penal de la RPCh, añadiendo los crímenes

de creación, liderazgo o participación en una organización terrorista, y endureciendo las sanciones para las actividades terroristas relacionadas.

Luego de los ataques terroristas a los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, muchos países adoptaron medidas efectivas para combatir el terrorismo. En diciembre del mismo año, el Comité Permanente de la APN aprobó la Enmienda III al Código Penal de la RPCh, especialmente dirigida a mejorar las disposiciones penales relativas a las actividades terroristas, clarificar la aplicación de la ley penal e incluir ocho artículos suplementarios; entre ellos se encuentra la adición del delito de financiación al terrorismo, que busca implementar la resolución número 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Simultáneamente, a fin de castigar el delito de lavado de dinero para la financiación de actividades terroristas, China incluyó el terrorismo como delito determinante del lavado de dinero. En junio de 2006, el Comité Permanente de la APN aprobó la Enmienda VI al Código Penal de la RPCh, la cual mejora las disposiciones relativas al delito de lavado de dinero para la financiación de actividades terroristas. En agosto de 2015, como respuesta al surgimiento de nuevas situaciones y cuestiones de violencia terrorista, el Comité Permanente de la APN aprobó la Enmienda IX al Código Penal de la RPCh, que incluyó los delitos de preparación de actividades terroristas, apología del terrorismo y del extremismo, incitación a cometer actos terroristas y el delito de empleo del extremismo para alterar el orden legal; además, la enmienda clarificó los cargos delictivos y la aplicación de las sanciones penales.

En 2012 y 2018, la APN y su Comité Permanente modificaron el Código de Procedimiento Penal de la RPCh. Con el fin

de responder a la necesidad de castigar las actividades terroristas, entre las modificaciones se encuentran disposiciones especiales sobre la investigación, la persecución y el enjuiciamiento de actividades terroristas; adicionalmente, el Tribunal Superior Supremo y la Fiscalía Popular Suprema, de manera independiente o conjunta, han promulgado una serie de interpretaciones judiciales, a fin de estandarizar aun más la aplicación de la ley penal antiterrorista y los correspondientes procesos penales.

— Desarrollo de una ley antiterrorista

Desde comienzos del siglo XXI, alrededor del mundo se han sucedido una serie de actos terroristas de gran magnitud. Como respuesta, uno tras otro, los países han elaborado sus propias leyes antiterroristas o enmendado las leyes existentes. En octubre de 2011, el Comité Permanente de la APN aprobó la “Decisión sobre asuntos relacionados con el fortalecimiento del trabajo antiterrorista”, con el fin de fortalecer la lucha antiterrorista, salvaguardar la seguridad nacional, mantener la estabilidad social y proteger la vida y la propiedad del pueblo. Las disposiciones de la Decisión definen el concepto de actividades terroristas, aclaran los organismos estatales que lideran la lucha antiterrorista y sus funciones, identifican las organizaciones e individuos terroristas y publican un listado de los mismos, y además desarrollan los principios para la cooperación internacional en esta materia, todo lo cual sentó una base sólida para la legislación posterior.

Entre 2011 y 2014, el terrorismo se intensificó y muchos países sucesivamente experimentaron ataques terroristas de gran envergadura. Además, fuerzas separatistas dentro y fuera del país, extremistas religiosos y otros agentes violentos protagonizaron una serie de incidentes de violencia y terror en Xin-

jiang, Beijing y Yunnan, pisoteando gravemente la dignidad de las personas.

Desde abril de 2014, con el fin de sintetizar la experiencia en su lucha contra el terrorismo, perfeccionar los mecanismos de lucha antiterrorista y contener la frecuencia y extensión de los actos de violencia y terror, los organismos que encabezan la lucha antiterrorista dirigieron a múltiples departamentos estatales a elaborar un proyecto de ley contra el terrorismo sobre la base de la investigación de campo, el estudio y argumentación, y las opiniones y sugerencias solicitadas a todas las partes interesadas. En octubre de 2014, el Comité Permanente de la APN adelantó las primeras deliberaciones acerca del proyecto y publicó su borrador, para obtener ampliamente los puntos de vista de la sociedad y realizar nuevas mejoras. Además, en febrero y diciembre de 2015, el Comité Permanente sostuvo, respectivamente, la segunda y tercera ronda de deliberaciones a fin de perfeccionar todo el proyecto.

El 27 de diciembre de 2015, el Comité Permanente de la APN aprobó la Ley Antiterrorista de la RPCh. Se trata de una ley especializada y comprensiva que, a fin de ofrecer garantías jurídicas para la prevención y el castigo de actividades terroristas, establece los principios fundamentales y posturas básicas frente al terrorismo, define las organizaciones e individuos terroristas, y estipula sobre la seguridad y prevención, la recaudación de inteligencia e información, la investigación, la respuesta a las emergencias, la cooperación internacional, las medidas de garantía y las responsabilidades legales. En abril de 2018, el Comité Permanente de la APN enmendó la ley para clarificar aun más las responsabilidades de los departamentos concernientes y facilitar la eficaz implementación del trabajo

**Ejemplo 1. Consulta a la opinión pública  
del proyecto de la Ley Antiterrorista**

Luego de las primeras deliberaciones acerca del proyecto de la Ley Antiterrorista, la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la APN, de conformidad con la Ley sobre la Legislación de la RPCh, publicó el proyecto de la Ley Antiterrorista en la página web de la APN y lo distribuyó a los concernientes departamentos centrales y de provincias, regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción central, así como a algunos centros de enseñanza superior e instituciones de investigación jurídica, a fin de solicitar sus sugerencias y perfeccionar el contenido del proyecto.

de la lucha antiterrorista.

— Mejora de otras leyes relevantes

Para fortalecer la coordinación sistemática entre las diferentes leyes relativas a la práctica antiterrorista, llenar lagunas jurídicas, subsanar los puntos débiles y formar una fuerza convergente, China se esfuerza en perfeccionar continuamente las disposiciones antiterroristas de las leyes pertinentes.

Por ejemplo: la Ley contra el Lavado de Dinero de la RPCh, adoptada en 2006, contiene disposiciones acerca de la prevención y supresión de la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas conexas; la Ley de Seguridad Nacional de la RPCh, adoptada en 2015, contiene disposiciones para combatir el terrorismo y el extremismo; la Ley de Ciberseguridad de la RPCh, adoptada en 2016, contiene disposiciones que prohíben el uso de la internet para promover el terrorismo o el extremismo; las enmiendas a la Ley de Defensa Nacional de la RPCh y a la Ley de la Policía Armada de la RPCh, ambas en 2020, contienen, respectivamente, disposiciones sobre el uso

legal de las fuerzas armadas para combatir el terrorismo y sobre los deberes de la Policía Armada en la prevención y manejo de actividades terroristas; y la Ley sobre la Salvaguardia de la Seguridad Nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la RPC, promulgada en 2020, contiene disposiciones sobre actividades delictivas del terrorismo en la Región Administrativa Especial de Hong Kong y sus correspondientes sanciones.

— Mejora de los reglamentos administrativos pertinentes

Con el fin de adaptarse constantemente a las necesidades prácticas de la lucha antiterrorista, fortalecer la coordinación y cooperación entre los departamentos administrativos encargados de la lucha antiterrorista y consolidar la responsabilidad de todas las partes concernientes, el Gobierno chino continúa perfeccionando las disposiciones sobre la lucha antiterrorista en los relativos reglamentos administrativos.

Por ejemplo: las Medidas Administrativas sobre los Servicios de Información de Internet, adoptadas en 2000, contienen disposiciones que prohíben la fabricación, copia, publicación o difusión de contenidos informativos que difundan el terror; la enmienda al Reglamento Administrativo de Asuntos Religiosos en 2017, contiene disposiciones que prohíben a todas las organizaciones y personas prevalerse de la religión para llevar a cabo actividades terroristas; y el Reglamento Administrativo sobre la Protección de Menores en Internet, adoptado en 2023, prohíbe la fabricación, copia, publicación o difusión de contenidos informativos que promuevan el terrorismo o el extremismo, y dañen la salud física o mental de los menores.

— Nuevas regulaciones locales

Luego de que la Ley Antiterrorista entrara en vigencia en

2016, de conformidad con la potestad jurídica conferida por la Constitución de la RPCh y la Ley sobre la Legislación de la RPCh, Xinjiang, Zhejiang, Hunan, Shanghai, Sichuan, Fujian y Beijing, entre otras localidades, sucesivamente desarrollaron medidas para la implementación de la ley en sus respectivas circunscripciones administrativas. Xinjiang formuló el Reglamento sobre la Desradicalización de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, la cual refina las medidas y métodos de la ley y la hace más maniobrable. Adicionalmente, algunas localidades agregaron el contenido de fortalecer la lucha antiterrorista al formular sus propias regulaciones sobre asuntos religiosos y seguridad pública.

— Formulación de estatutos departamentales y de gobiernos locales

A fin de implementar mejor las leyes y regulaciones antiterroristas en las distintas áreas y regiones, los departamentos concernientes y los gobiernos locales, de conformidad con las potestades y procedimientos legales, han formulado sucesivamente estatutos antiterroristas que se ajustan a sus necesidades reales.

Por ejemplo: en 2014, el Banco Popular de China, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad Estatal formularon conjuntamente las Medidas para el Congelamiento de Activos Relacionados con Actividades Terroristas, que contienen disposiciones especiales sobre los procedimientos y acciones encaminadas a congelar los activos involucrados en actividades terroristas; y en 2021, el gobierno popular de la provincia de Qinghai aprobó las Medidas Administrativas sobre la Seguridad del Transporte Ferroviario en la Provincia de Qinghai, cuyas disposiciones establecen un mecanismo de

coordinación del comando antiterrorista y fortalecen la construcción de la capacidad de prevenir los ataques terroristas.

Gracias a más de 40 años de exploración y práctica, China ha desarrollado gradualmente un marco jurídico antiterrorista arraigado en la Constitución, centrado en la Ley Antiterrorista y amparado en las leyes penales y la Ley de Seguridad Nacional, entre otras leyes complementarias. Este marco se extiende además a los decretos administrativos, explicaciones judiciales, regulaciones locales, así como a los estatutos departamentales y de los gobiernos locales.

## **II. Disposiciones claras para determinar y castigar las actividades terroristas**

El derecho chino estipula claros estándares para determinar las actividades terroristas y sus penas, evalúa su grado de peligrosidad para distinguir entre infracciones administrativas y delitos penales y estipula distintas formas de responsabilidad jurídica. Los estándares para determinar las conductas ilegales relacionadas con actividades terroristas y sus sanciones se encuentran en las disposiciones de la Ley Antiterrorista; aquellos para determinar los delitos relacionados con actividades terroristas y sus penas, en las disposiciones del Código Penal.

— Definición clara de los conceptos de terrorismo, actividades terroristas y otros conexos. La Ley Antiterrorista de la RPCCh ofrece una definición específica y clara de los conceptos de terrorismo, actividades terroristas y otros conexos, en armonía con las convenciones internacionales de las que China hace parte y con las prácticas de otros países.

El concepto de terrorismo abarca simultáneamente sus medios, objetivos y formas de manifestarse: los medios incluyen “la violencia, destrucción e intimidación, entre otros”; los objetivos son “la generación de pánico social, el daño a la seguridad pública, el perjuicio a la integridad o propiedad de las personas y la coerción a los organismos del Estado o a las or-

ganizaciones internacionales, para alcanzar sus propósitos políticos e ideológicos, entre otros”; y las formas de manifestarse se dividen en “declaraciones o actuaciones, pero de naturaleza terrorista y expresándose mediante la organización, planificación, preparación o ejecución de conductas con relevancia jurídica”.

Además, la Ley Antiterrorista de la RPCh y el Reglamento sobre la Desradicalización de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang también definen el concepto de extremismo y enumeran una lista de los hechos concretos que constituyen actividades extremistas, ya que el extremismo claramente constituye la base ideológica del terrorismo.

— Estándares claros para la determinación de las conductas terroristas ilegales. El Código Penal atribuye responsabilidad penal frente a actividades terroristas que causan graves daños a la sociedad y, la Ley Antiterrorista y otras leyes relevantes establecen sanciones administrativas frente a infracciones menores que no constituyen delitos. Los actos de promoción o incitación del terrorismo o el extremismo que por su levedad no constituyan hechos criminales serán castigados con sanciones administrativas impuestas por los órganos de seguridad pública de conformidad con la ley.

La gravedad o levedad de estas conductas será determinada por los órganos judiciales y de aplicación de la ley, atendiendo a que la conducta reúna o no los elementos de un delito, a la intención dolosa del implicado, al rol que este ocupó en su comisión, al daño causado a la sociedad, entre otros factores que deben juzgarse de manera comprensiva.

— Estándares claros para la determinación de las conductas terroristas delictivas. Mediante el Código Penal, las interpre-

taciones judiciales y los estándares de enjuiciamiento, China ha aclarado los criterios para la determinación de las conductas terroristas delictivas. El Código Penal, a partir del objeto y del aspecto objetivo del delito, del sujeto y de los aspectos subjetivos del delito, ha elaborado una clara regulación de los elementos que configuran una conducta terrorista delictiva, distinguiendo nítidamente entre las conductas delictivas y no delictivas, entre los distintos tipos de delitos y entre la comisión de uno o varios delitos.

De acuerdo con el principio de legalidad, nadie debe ser condenado por conductas que no han sido expresamente prohibidas por la ley. Los organismos judiciales, mediante sus interpretaciones y providencias, aclaran los criterios para instaurar una acción penal y refinan aun más los criterios para determinar las conductas terroristas delictivas. Por ejemplo, en 2018, el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y otras autoridades emitieron las “Opiniones sobre algunas cuestiones relativas a la aplicación de la ley en casos de delitos relaciona-

### **Ejemplo 2. Determinación de las conductas terroristas ilegales**

Un sospechoso de apellido Wan, compartió en su red social un video con escenas sangrientas y violentas que fue luego compartido por muchas otras personas, generando así efectos perjudiciales. El contenido del video reunía los elementos que configuran la promoción del terrorismo y su disseminación estaba prohibida por las leyes y reglamentos administrativos. Una agencia de seguridad pública de Sichuan, con base en las disposiciones pertinentes de la Ley Antiterrorista de la RPCh, determinó que el comportamiento de Wan constituía una conducta terrorista ilegal de difusión y promoción del terrorismo.

dos con el terrorismo y extremismo”, con las cuales precisaron los estándares sobre la cantidad de materiales necesarios para configurar el delito de posesión ilegal de propaganda terrorista o extremista.

— Adhesión al principio del castigo a las conductas terroristas ilegales. Los órganos de aplicación de la ley de China se adhieren al principio de legalidad de las sanciones administrativas, orientadas a las conductas terroristas ilegales, observan estrictamente la Ley Antiterrorista, la Ley de las Sanciones Administrativas para la Seguridad Pública y la Ley de Castigo Administrativo, entre otras normas.

Se persiste en el principio de proporcionalidad de la sanción, asegurando que esta y la conducta que castiga, en razón de los hechos, sus características, los detalles del caso y el daño causado a la sociedad, se correspondan.

### **Ejemplo 3 Determinación de las actividades terroristas delictivas**

Entre el año 2004 y 2010, un sospechoso de apellido Bai, suministró en repetidas ocasiones facilidades de transporte, alojamiento e identificación falsa, a sabiendas de que las personas interesadas tenían la intención de salir ilegalmente del país para cometer actos terroristas. La conducta de Bai condujo a consecuencias graves. Luego de un proceso penal, un tribunal en la provincia de Henan determinó que, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código Penal de la RPCh, la conducta de Bai constituía el delito de financiación de actividades terroristas.

Se persiste en el principio que prohíbe sancionar dos veces por la misma conducta. No debe aplicarse más de una sanción administrativa respecto de una misma conducta ilegal, y si una

misma conducta ilegal viola varias normas que prescriben distintas multas se deberá aplicar la disposición que prescribe la multa más alta.

Las agencias de aplicación de la ley implementan un sistema de discrecionalidad administrativa sujeto a estándares, y refinan y publican los índices cuantitativos relativos al ámbito, categoría y amplitud de la discrecionalidad administrativa empleada en sus actuaciones. Desde 2018, los departamentos de seguridad pública de Anhui, Zhejiang, Beijing y Heilongjiang han establecido e implementado criterios de discrecionalidad administrativa para regular las actividades de aplicación de la ley en la administración contra el terrorismo.

**Ejemplo 4 Sanción administrativa a las conductas terroristas ilegales**

Un sospechoso de apellido Zhan publicó en internet videos con imágenes sangrientas y violentas. Basado en las disposiciones pertinentes de la Ley Antiterrorista de la RPCh, un departamento de seguridad pública en la provincia de Fujian le aplicó a Zhan una sanción administrativa.

— Estandarización de la potestad discrecional para sancionar conductas terroristas delictivas. Al juzgar los casos penales relacionados con actividades terroristas, los tribunales populares se adhieren al principio de que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad del delito y a la responsabilidad penal implicada, y aplican el Código Penal para determinar el castigo apropiado para los delincuentes, teniendo en cuenta los hechos, la naturaleza y las circunstancias del delito, así como el daño que causó a la sociedad.

Con el fin de hacer que las penas sean más científicas y

uniformes, los órganos judiciales chinos han promovido activamente la reforma para la mejora y estandarización de las condenas, formulando las “Opiniones orientadoras del Tribunal Popular Supremo sobre la regulación práctica del ejercicio de la discrecionalidad para garantizar la aplicación uniforme de la ley durante los juicios”, las “Opiniones orientadoras del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema sobre las sentencias frente a delitos comunes (aplicación experimental)” y las “Opiniones del Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad Estatal y el Ministerio de Justicia sobre algunas cuestiones relativas a la estandarización de los trámites de sentencias”. A la luz del principio de discrecionalidad adecuada a las circunstancias y de la recta interpretación y aplicación de la ley en los juicios y en las sentencias penales frente a conductas terroristas delictivas, las agencias judiciales han hecho grandes esfuerzos para estandarizar su potestad discrecional, de manera que exista un balance adecuado entre la severidad y la indulgencia y que la pena se corresponda al castigo.

#### **Ejemplo 5 Sanción penal a las conductas terroristas delictivas**

Un sospechoso de apellido Liu fue acusado de difundir el terrorismo por una fiscalía de Chongqing. En atención a las disposiciones pertinentes del Código Penal de la RPCh, un tribunal de Chongqing determinó a través de un proceso judicial que Liu había cometido el delito de apología del terrorismo y, en atención a las circunstancias, naturaleza, detalles y el daño social del crimen, lo condenó a pena de prisión suspendida y al pago de una multa.

### **III. Ejercicio estandarizado del poder en la lucha contra el terrorismo**

En relación con las conductas terroristas, el derecho chino distingue entre infracciones administrativas y delitos penales, y estipula distintos procedimientos para su enjuiciamiento. A los casos por infracciones administrativas se les aplica el procedimiento para sanciones administrativas, mientras que a los delitos penales se les aplica el procedimiento penal. Mediante la estandarización conforme a la ley de los procedimientos para el enjuiciamiento de las conductas terroristas, la implementación de las responsabilidades sobre su manejo y el fortalecimiento de su supervisión externa, se ha asegurado que el poder de enjuiciamiento se ejerza de manera regular y ordenada.

— Estandarización de los procedimientos. El derecho chino claramente estipula las facultades y responsabilidades de los órganos encargados de hacer cumplir la ley y administrar justicia frente a los distintos casos. La investigación y manejo de los casos por conductas terroristas ilegales son responsabilidad de los órganos de seguridad pública de conformidad con la ley; y aquellos por conductas terroristas delictivas son investigados por los organismos de seguridad pública, procesados por las fiscalías populares y enjuiciados por los tribunales populares.

En el manejo de los casos de conductas terroristas, los ór-

ganos encargados de aplicar la ley y administrar justicia deben ejercer sus funciones y cumplir sus deberes de manera estricta y conforme a la ley, y asegurar que la aplicación de la ley sea precisa y eficaz. Los órganos de seguridad pública deben retirar los casos que no debieron ser registrados, y las fiscalías populares tienen la facultad de supervisarlos en esta actuación.

Al recopilar y obtener pruebas, los órganos de seguridad pública deben reunir tanto las pruebas desfavorables como las favorables para el sospechoso, y abstenerse de lograr pruebas mediante tortura o coerción. Las pruebas obtenidas de manera ilegal deben ser desechadas.

Al aprobar detenciones o decidir formular una acusación, las fiscalías populares deben abstenerse de autorizar lo uno o lo otro, si no se cumplen todos los requisitos necesarios.

Al momento del juicio, los tribunales populares deben emitir sentencia absolutoria, si las pruebas de cargo son insuficientes o la conducta no constituye un delito.

— Implementación de la responsabilidad por el manejo de los casos. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley y administrar justicia en China promueven activamente la reforma del sistema de responsabilidad por el manejo de los casos, con el fin de asegurar la implementación estricta y severa de la ley, la recta impartición de justicia y el cumplimiento eficaz de las funciones por parte de los funcionarios responsables del manejo de los casos por conductas terroristas.

Los tribunales populares han realizado esfuerzos para clarificar las facultades de organización de los juicios y las responsabilidades de los jueces, tomando como garantía una gestión y supervisión eficaz, profundizando en la reforma sustantiva de las audiencias y garantizando que los jueces cumplan sus

deberes y ejerzan sus funciones de manera independiente e imparcial.

Las fiscalías populares han creado un mecanismo justo y eficiente para ejercer su poder mediante la mejora de la organización de casos, la definición de la división interna de las funciones y el perfeccionamiento del sistema de responsabilidad judicial para garantizar la rendición de cuentas de quienes se ocupan de los casos y toman decisiones.

Los órganos de seguridad pública han establecido y perfeccionado un mecanismo de control apropiado para la revisión de casos, el cual aclara las funciones de los encargados de manejarlos, revisarlos y aprobarlos. También, utilizan ampliamente las tecnologías de la información para registrar y permitir la revisión retrospectiva de todas las actuaciones relacionadas con el manejo de los casos, y controlar las mismas.

Basados en unas responsabilidades claras, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y administrar justicia también han estipulado un estricto sistema de rendición de cuentas, de manera que se investigue a quienes manejen los casos de forma contraria a la ley, se les discipline según las circunstancias y se fiscalice su responsabilidad penal. Adicionalmente, dichos organismos han profundizado la reforma para estandarizar la determinación de las penas, establecido un sistema de evaluación de la calidad de los casos, implementado un mecanismo de evaluación y valoración de su conducción y han fortalecido su manejo, dirección, así como el entrenamiento de los responsables, de manera que el ejercicio de sus funciones se encuentre enteramente regulado.

— Fortalecimiento de la supervisión externa. Además de estar sujetos a los mecanismos legales de supervisión interna,

los órganos encargados de hacer cumplir la ley y administrar justicia de China también están sujetos a la supervisión de las asambleas populares, a la supervisión democrática ejercida por los comités de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh) y a la supervisión de la sociedad, entre otras formas de supervisión externa.

En cuanto órganos del poder estatal, las asambleas populares ejercen la supervisión de los tribunales populares y de las fiscalías populares según la ley, a través de audiencias sobre sus reportes de trabajo y de indagaciones especiales. Además, los comités de la CCPPCh realizan la supervisión democrática de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y administrar justicia. Por su parte, los tribunales populares, las fiscalías populares y los órganos de seguridad pública también toman la iniciativa de someterse a la supervisión de las asambleas populares y los comités de la CCPPCh; ellos además se sujetan a la supervisión social, mediante la participación de las masas populares en el trabajo de jurados populares, supervisores populares y en audiencias.

**Ejemplo 6 El manejo de casos por parte de las fiscalías populares se sujeta a la supervisión social**

A un sospechoso de apellido Zhang se le inició una investigación por el delito de posesión ilegal de artículos con propaganda terrorista. Durante la etapa de investigación y acusación, una fiscalía de la provincia de Anhui adelantó audiencias públicas y consultó ampliamente la opinión de todas las partes interesadas, exponiéndose así a la supervisión externa.

— Ampliación de los canales de supervisión. Los organis-

mos encargados de hacer cumplir la ley y administrar justicia en China continúan ampliando los canales de supervisión y, por diversos medios, han fortalecido la supervisión social, mejorado continuamente la transparencia y prevenido los abusos de poder.

Los tribunales populares han aumentado el grado de apertura de todas sus actuaciones, divulgando información sobre los procesos judiciales, las providencias, su ejecución y las audiencias, e informando oportunamente del estado de los juicios y de los trámites ejecutivos. Las fiscalías populares promueven la transparencia mediante la divulgación, de conformidad con la ley, de sus actividades y asuntos relacionados, y además utilizan ampliamente las tecnologías de la información, construyendo plataformas informativas de sus actuaciones, instalando equipos para la consulta y despliegue de información, así como sitios y páginas web para consulta pública. Los órganos de seguridad pública promueven la apertura de sus labores policivas, observan el principio de publicidad de las sanciones administrativas y se someten voluntariamente a la supervisión de la sociedad y de los ciudadanos informándoles sobre el proceso de ejecución de la ley y los resultados de las sanciones. Los or-

#### **Ejemplo 7 Mayor transparencia en los asuntos penitenciarios**

Las autoridades carcelarias de China han publicado un manual sobre la divulgación de asuntos penitenciarios para promover la difusión diferenciada de información a diferentes grupos sobre la base de la protección de la privacidad de los reclusos. La información general se divulga al público para su conocimiento, se comparte información más detallada con la familia de los convictos y se divulga información completa a las agencias supervisoras de aplicación de la ley.

ganismos administrativos con funciones judiciales promueven la transparencia en los asuntos carcelarios, publican información sobre las condiciones, los procesos y los resultados de la aplicación de la ley en las cárceles, y fortalecen la estandarización, institucionalización y construcción del imperio de la ley respecto a su trabajo de cárceles.

## **IV. Protección de los derechos humanos en las prácticas antiterroristas**

China considera el respeto y protección de los derechos humanos como el principio básico de su sistema jurídico y de sus prácticas antiterroristas. El país combina orgánicamente la sanción legal de las actividades terroristas y la protección de los derechos humanos, y en el proceso de atender los casos por conductas terroristas ilegales o delictivas, atiende no solo a la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos y al mantenimiento del orden social, sino además a los derechos de las víctimas y demás partes interesadas, incluyendo los sospechosos, acusados y condenados.

— Garantía de un ambiente seguro y del orden social para el disfrute de los derechos humanos. El terrorismo comporta una grave amenaza para la seguridad nacional y pública, así como para la vida y propiedad de las personas, de manera que el fortalecimiento de las medidas de lucha antiterrorista, la prevención y el combate eficaces del terrorismo son un aspecto importante de la protección de los derechos humanos. China lleva a cabo su lucha antiterrorista de conformidad con la ley, por un lado, protegiendo con determinación los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y organizaciones, y prohibiendo cualesquier formas de discriminación por motivos

geográficos, étnicos o religiosos; por otro lado, conteniendo eficazmente la difusión del terrorismo, protegiendo al grado máximo los derechos de los ciudadanos a la vida, a la salud y a la propiedad, y manteniendo la estabilidad social.

**Ejemplo 8 El sentido de seguridad de las masas ha aumentado significativamente**

La encuesta nacional sobre el sentido de seguridad de las masas revela que entre 2012 y 2021 la percepción favorable de seguridad de la población china pasó del 87,55% al 98,62%, manteniéndose en un nivel elevado y obteniendo la aprobación del público.

— Protección de los derechos de las víctimas y otras partes interesadas. Al enfrentar situaciones de terrorismo, China da prioridad a la seguridad personal de quienes han sido directamente lesionados o amenazados, organiza el rescate y auxilio de las víctimas y dispersa, evacúa y realoja a las personas en peligro; luego de finalizar la respuesta inicial, el país organiza a los departamentos concernientes para que ayuden a los individuos y organizaciones perjudicados a reanudar normalmente su vida y actividades, y a que se establezcan el orden social y el sentimiento público en las áreas afectadas; además, estos departamentos ofrecen ayuda oportuna y adecuada a las víctimas de terrorismo y a sus familiares cercanos, proporcionándoles cuidados psicológicos y médicos, así como las condiciones básicas para su subsistencia, cuando las hayan perdido.

— Protección de la libertad y dignidad personales. La Constitución y las leyes chinas estipulan claramente que la libertad y dignidad personales son inviolables.

### **Ejemplo 9 Asistencia a las víctimas de actividades terroristas**

Luego de un incidente terrorista en la región autónoma uigur de Xinjiang, los departamentos pertinentes organizaron activamente la ayuda a las personas afectadas, coordinando con sicólogos profesionales y médicos para su valoración mental y tratamiento médico, incluyendo asesoramiento psicológico y ejercicios físicos. Estos esfuerzos tenían como objetivo ayudar a las víctimas a recuperar su salud física y mental.

Si al ocuparse de los casos por actividades terroristas, los organismos pertinentes deben detener, arrestar o de cualquier otra forma restringir la libertad de una persona, tienen que observar rigurosamente las condiciones, procedimientos y plazos prescritos por la ley. Sin la aprobación de una fiscalía popular o de un tribunal popular, los órganos de seguridad pública no deben llevar a cabo un arresto. Las fiscalías populares han fortalecido el examen de necesidad de las detenciones, y recomiendan la liberación o la modificación de las medidas coercitivas cuando la detención no es necesaria, y además manejan con rigor las condiciones que permiten extender la detención durante la etapa de investigación, de manera que no prolongan aquellas que no las cumplan.

Los organismos encargados de manejar los casos obedecen las disposiciones constitucionales y legales que consagran la inviolabilidad de la dignidad humana, garantizan que los sospechosos o acusados de cometer conductas terroristas ilegales o delictivas reciban la alimentación y tengan el descanso necesario, y deben abstenerse de aplicarles castigos corporales, maltratarlos o insultarlos. Se prohíben las agresiones, amenazas o intimidaciones durante los interrogatorios, las confesio-

nes extraídas mediante tortura o coerción y el uso de trampas o engaños o cualesquier otros medios ilegales para la recolección de pruebas. Se prohíbe coaccionar a los sospechosos o acusados para que se autoincriminen, de manera que las confesiones obtenidas mediante tortura y coerción deben ser anuladas.

**Ejemplo 10 Adopción cautelosa de medidas penales coactivas según la ley**

A los cinco sospechosos de la región autónoma uigur de Xinjiang se les abrieron investigaciones separadas por su participación en una organización terrorista. Al momento de determinar su arresto, las fiscalías locales, de conformidad con la ley, aprobaron la detención de solo un sospechoso, acusado de cometer el delito. Se determinó que los otros cuatro no habían representado peligro real y sus arrestos fueron rechazados.

— Garantía del derecho a la defensa. Desde el momento en que los organismos de investigación adelanten el primer interrogatorio o adopten la primera medida coercitiva, los sospechosos y acusados de haber cometido conductas terroristas delictivas tienen derecho a la asistencia jurídica y, de darse las circunstancias legales, tienen derecho a un abogado de oficio. Los organismos judiciales y administrativos encargados de administrar justicia promueven activamente los programas piloto para el servicio integral de defensa por parte de abogados en la etapa de investigación y enjuiciamiento, asignan defensores de oficio a los sospechosos que carecen de abogado y extienden los ámbitos de asistencia jurídica.

Adicionalmente, para asegurar la realización efectiva del derecho a la defensa de los sospechosos y acusados, así como su acceso a una defensa eficaz, los organismos judiciales forta-

leen aun más el derecho de los abogados a acceder a información, presentar peticiones y apelar, así como a reunirse con sus clientes, acceder a los expedientes, recabar pruebas, adelantar interrogatorios a las partes interesadas y a terceros y debatir lo alegado por la contraparte.

**Ejemplo 11 Protección del derecho a la defensa del acusado**

Durante una audiencia en Xinjiang en la que los tres acusados de organizar, liderar y participar en actividades terroristas carecían de defensa, el tribunal popular local, de conformidad con la ley, les asignó a cada uno un defensor de oficio con el fin de asegurarles su derecho a la defensa.

— Garantía del derecho a la información y a la participación. Antes de emitir una sanción administrativa de una conducta ilegal terrorista, los organismos administrativos deben informar a la parte interesada del contenido, los hechos, las razones y los fundamentos legales de la decisión, así como de su derecho a declarar, defenderse y pedir ser escuchado en audiencia. Si los hechos, razones y pruebas ofrecidos por la parte interesada son válidos, los organismos administrativos deben admitirlos.

Durante la investigación de casos por conductas terroristas delictivas, se restringen estrictamente las circunstancias en las que no se notifica a los familiares del implicado sujeto a medidas coactivas. Desaparecidas las circunstancias por las que el hecho de informar a los familiares puede entorpecer la investigación, ellos deben ser notificados inmediatamente.

En los procesos penales, los sospechosos y acusados de haber cometido conductas terroristas delictivas tienen derecho a conocer oportunamente los cargos que se les imputan y

las circunstancias específicas del caso, así como su derecho a defenderse, recusar, asistir a las audiencias, participar en las investigaciones, debatir y presentar sus alegatos finales.

— Garantía del derecho al remedio legal. El derecho chino protege el derecho de las partes interesadas a obtener remedio legal integral y multicanal.

Las personas sancionadas por una conducta terrorista ilegal, en caso de no estar de acuerdo con la decisión, tienen el derecho a solicitar una reconsideración administrativa o a formular una demanda administrativa, y pueden apoderar a un abogado para que las defienda.

Los acusados por conductas terroristas delictivas, sus defensores autorizados y familiares cercanos tienen el derecho a apelar las sentencias y demás decisiones de primera instancia emitidas por los tribunales locales, y no pueden ser desprovistos de este derecho por ningún motivo. Respecto a los fallos y demás decisiones que ya hayan entrado en vigencia, las partes interesadas tienen derecho a apelar y, si la apelación cumple con las condiciones legales, los tribunales y las fiscalías populares deben comenzar un proceso de supervisión del juicio, en tanto que el caso será enjuiciado nuevamente por el tribunal popular.

Las partes interesadas, cuyos derechos e intereses sean lesionados por sanciones administrativas o condenas penales ilegales tienen el derecho a solicitar una compensación estatal de conformidad con la ley.

— Garantía del derecho de usar el lenguaje étnico oral y escrito durante los procesos judiciales. La Constitución y las leyes chinas conceden a los ciudadanos de todos los grupos étnicos del país el derecho a usar su propio idioma, de forma oral o escrita, para litigar en un proceso.

Los organismos judiciales que enjuicien casos por conductas terroristas delictivas deben ofrecer servicio de traducción a las partes interesadas que no dominen el idioma local hablado o escrito.

En áreas en que las minorías étnicas viven en comunidades compactas o en las que múltiples grupos étnicos cohabiten, las audiencias serán adelantadas en la lengua oral común de la localidad, mientras que las sentencias, notificaciones y demás documentos serán publicados en la lengua escrita comúnmente empleada en la localidad. En zonas étnicas autónomas, los tribunales y las fiscalías populares deben tramitar los casos en la lengua local común, y estarán razonablemente equipados de personal que comprenda el lenguaje oral y escrito de la minoría étnica; los documentos legales, según las necesidades del caso, serán redactados en una o varias de las lenguas locales.

**Ejemplo 12 Protección del derecho de los litigantes a intervenir en el proceso usando la lengua oral y escrita del grupo étnico al que pertenecen**

En un lugar de Xinjiang se presentó un caso de violencia terrorista. Los sospechosos, acusados y las víctimas, así como sus familiares cercanos, pertenecían a múltiples grupos étnicos y empleaban distintas lenguas étnicas. Durante el juicio, un tribunal popular de Xinjiang convocó oportunamente a los traductores a participar en las audiencias, se suministró el servicio de traducción y se tradujeron los documentos legales pertinentes; además, se garantizó el derecho de todas las partes interesadas a intervenir en el proceso utilizando su propia lengua étnica.

— Garantía de los derechos e intereses legítimos de los condenados. La ley china estipula claramente que la dignidad,

integridad física y propiedad legal de los condenados no deben ser violadas, tampoco su derecho de defensa y apelación in su derecho a presentar quejas y acusaciones, entre otros de que no hayan sido privados o restringidos legalmente.

Los organismos encargados de ejecutar las penas respetan la dignidad personal de los condenados por conductas terroristas delictivas, y garantizan sus derechos e intereses legales. Las fiscalías populares llevan a cabo la supervisión legal de la ejecución de las penas. Si el condenado no está de acuerdo con una decisión vigente, puede instaurar una apelación. Si el condenado presenta una acusación o queja, los organismos encargados de ejecutar las penas deben oportunamente darle trámite o reportarla al departamento competente, y además deben notificarle el resultado al condenado.

Durante su encarcelamiento, los condenados pueden comunicarse con otras personas vía correspondencia y reunirse con sus familiares, abogados y terceros. A fin de asegurar el tratamiento oportuno de los prisioneros enfermos, las cárceles cuentan con instalaciones médicas especializadas y, de ser necesario, ellos pueden salir de prisión o ser puestos en libertad condicional por tratamiento médico.

Las cárceles se adhieren al principio de “combinar el castigo y la rehabilitación, teniendo la rehabilitación como objetivo”, de modo que ellas les ofrecen educación cultural, legal y técnica a los condenados por conductas terroristas delictivas, a fin de elevar su nivel cultural y su capacidad de ganarse la vida, así como de prevenir que reincidan en el delito luego de haber sido liberados de prisión.

Los organismos de ejecución de penas y los tribunales populares, siguiendo estrictamente los procedimientos y requisi-

tos legales, se ocupan de tramitar los casos de conmutación y libertad condicional. A petición del organismo que ejecuta las penas, y bajo la supervisión de las fiscalías populares, los tribunales populares pueden reducir penas y conceder libertad condicional a favor del condenado que cumpla con los requisitos legales.

## **V. Protección efectiva de la seguridad del pueblo y la seguridad nacional**

China lleva a cabo su lucha antiterrorista de conformidad con la ley y aumenta continuamente sus capacidades antiterroristas. Coordinando eficazmente la seguridad y estabilidad con el desarrollo social, el país ha eliminado las bases ideológicas del terrorismo, incrementado el sentido de seguridad de la población, salvaguardado la seguridad nacional y contribuido activamente a la seguridad y estabilidad regionales y globales.

— Incremento continuo de las capacidades antiterroristas. Junto con la mejora constante del sistema jurídico, China sigue mejorando la construcción del sistema de la seguridad en la administración de diversos sectores, como el transporte, la logística y las mercancías peligrosas. Además, el país promueve activamente la construcción de estándares de prevención antiterroristas en sectores industriales y localidades claves, formula y revisa continuamente los planes de lucha antiterrorista, fortalece los ejercicios preparatorios y mejora la capacidad social de prevención y control. China promueve y apoya la investigación científica y la innovación tecnológica antiterroristas, desarrolla y expande el uso de nuevos equipos y tecnologías tanto en la capacitación práctica como en el combate real, e incrementa ininterrumpidamente su capacidad científica y tecnológica anti-

terrorista mediante el manejo eficiente de diversas tecnologías, como la inteligencia artificial, la encriptación y las criptomonedas.

China insiste en combinar la lucha antiterrorista especializada con la línea de masas del Partido, efectuando ampliamente actividades de divulgación y educación antiterroristas en campus, lugares de trabajo, zonas residenciales y demás sectores de la sociedad. El país ha empleado material de sensibilización dirigido a toda la comunidad, como el Manual Ciudadano de Prevención del Terrorismo, ha introducido incentivos para reportar actividades terroristas y ha movilizado ampliamente a las masas para que suministren información, aumentando la conciencia de la población sobre el control de la seguridad y su capacidad de respuesta a situaciones de violencia terrorista repentina.

**Ejemplo 13 Construcción de un sistema de estándares para la prevención del terrorismo**

China promueve activamente la formulación de estándares de prevención del terrorismo en sectores clave como el transporte, el agua, la electricidad, el petróleo, el gas, la energía geotérmica, las instalaciones nucleares, las empresas que emplean tecnología nuclear, las instalaciones de los medios de comunicación, los productos químicos peligrosos, la bioseguridad y las reservas estratégicas nacionales. Hasta ahora, el Ministerio de Seguridad Pública ha publicado 37 estándares sectoriales para la prevención del terrorismo en materia de seguridad pública, y se han expedido cientos de estándares a nivel local, todo lo cual ha proporcionado una base de apoyo para la construcción de sistemas de prevención humanos, materiales y digitales, así como para el diseño, la construcción y la operación sincrónicos de equipos e instalaciones clave.

— Mejoras en la coordinación de la seguridad y estabilidad con el desarrollo social. Desde 2014, China ha seguido combatiendo con severidad la violencia terrorista, castigando conforme a la ley a una serie de criminales que planeaban ejecutar actividades terroristas, eliminando la gran mayoría de las mismas en la etapa de planificación y antes de su ejecución, salvaguardando así la seguridad nacional y la estabilidad social, y mejorando significativamente el sentido de seguridad del pueblo.

La lucha contra el terrorismo promueve la seguridad y estabilidad, que posibilitan los dividendos del desarrollo y estos, a su vez, consolidan aun más la seguridad y estabilidad. Tomando como ejemplo a Xinjiang, principal campo de batalla de la lucha antiterrorista en China, entre 2012 y 2022, la renta disponible per cápita de los residentes urbanos aumentó de 19.019 a 38.410 yuanes, mientras que la de los residentes rurales aumentó de 6.876 a 16.550 yuanes, un incremento respectivo de 1,02 y 1,4 veces. A finales de 2020 ya habían salido de la precariedad los 3,06 millones de personas que antes vivían bajo la línea de la pobreza en las zonas rurales según el estándar vigente, flagelo que se erradicó completamente de las 3.666 aldeas y 35 distritos previamente pobres. En 2023, Xinjiang recibió un total de 265,44 millones de visitas turísticas tanto nacionales como extranjeras, lo que representa un aumento interanual del 117% y un nuevo record para el número de visitas turísticas, así como una renta turística de 296.700 millones de yuanes, que constituyen un incremento del 227% respecto del año previo. Xinjiang es ahora un destino turístico de primer orden en el país, y la industria turística se ha convertido gradualmente en un pilar importante para la promoción del empleo, así como para enriquecer y beneficiar a la población.

— Eliminación de la base ideológica del terrorismo. Al mismo tiempo que castiga con severidad las conductas terroristas ilegales y delictivas, China presta incluso más atención a las medidas no punitivas de educación para salvar a quienes han sido embaucados por ideologías extremistas, pero no han realizado conductas que produzcan consecuencias perjudiciales graves. Los departamentos gubernamentales pertinentes, la Federación de Mujeres y otras organizaciones sociales, los grupos religiosos, las escuelas y las familias trabajan en estrecha colaboración para atender las circunstancias especiales de quienes han sido infectados por el terrorismo, adoptar diversas medidas de intervención y evitar que sufran más daños.

El extremismo religioso no es religión, sino una distorsión de las doctrinas religiosas para defender opiniones radicales violentas y perturbar gravemente las actividades religiosas normales. Bajo la influencia y el control del extremismo religioso, algunas personas participan o han sido instigadas, coaccionadas o engatusadas para participar en actividades terroristas.

China se adhiere al principio de “proteger las actividades legales, impedir las ilegales, frenar el extremismo, resistir a la infiltración y atacar los actos delictivos”. El país protege de manera efectiva la libertad de creencias religiosas, garantiza las actividades religiosas normales, continúa promoviendo el trabajo de desradicalización según la ley y contiene eficazmente la infiltración y propagación del extremismo religioso.

Las masas han incrementado notablemente su conciencia acerca del Estado de derecho y en general son capaces de reconocer los peligros del extremismo religioso; su capacidad de discernir entre el bien y el mal y de resistir la infiltración del extremismo ha aumentado significativamente.

— Contribuciones activas a la seguridad y estabilidad globales y regionales. Mediante el combate vigoroso de las actividades terroristas domésticas, el fortalecimiento del control portuario y fronterizo y el freno al flujo transfronterizo de terroristas, China ha contenido eficazmente la propagación y extensión del terrorismo. Conforme a las disposiciones legales, los tratados internacionales que ha celebrado o a que se ha adherido y según los principios de igualdad y de beneficio mutuo, el país ha adelantado una activa cooperación internacional antiterrorista. China persevera en la concepción de comunidad de destino de la humanidad, apoya activamente los esfuerzos de liderazgo y coordinación que realiza la ONU en la lucha antiterrorista internacional, observa la Carta de las Naciones Unidas y otras normas internacionales reconocidas, y apoya una serie de resoluciones antiterroristas aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que ha participado sucesivamente en 12 convenciones antiterroristas mundiales y ha cumplido activamente sus deberes en la lucha contra el terrorismo.

China aboga activamente por la cooperación regional antiterrorista. En el marco de la Organización de la Cooperación de Shanghai (OCS), el país ha promovido la formulación de una serie de documentos, como la Convención de Shanghai para Combatir el Terrorismo, Separatismo y Extremismo y el Acuerdo de Cooperación para la Seguridad Fronteriza de los Países Miembros de la OCS; asimismo, ha desarrollado la cooperación judicial y los ensayos conjuntos antiterroristas con otros países, y ha jugado un rol importante en el mantenimiento de la seguridad internacional y regional. Mediante la constitución de mecanismos antiterroristas para el encuentro, intercambio y colaboración entre los organismos de aplicación de la ley y

las zonas fronterizas, China ha realizado una comunicación y cooperación pragmáticas con decenas de países en áreas como el intercambio de información, el control fronterizo, la investigación criminal, la lucha contra la financiación del terrorismo, entre otras.

## Conclusión

El mundo tiene un destino común, si bien caminos diferentes, y es posible llegar a consensos a pesar de la variedad de inquietudes. Garantizar que la lucha antiterrorista se adelante por la vía del imperio de la ley es el consenso general de la comunidad internacional en la actualidad. Sin embargo, existen diferencias en sistemas políticos y jurídicos, disparidad en las tradiciones culturales, además de que no son completamente iguales los patrones, formas y conductas en que se manifiesta el terrorismo, por lo que las prácticas del imperio de la ley de los diferentes países en la lucha contra el terrorismo tampoco pueden ser del todo idénticas.

El sistema jurídico institucional antiterrorista de China ha experimentado más de 40 años de perfeccionamiento, logrando que el espíritu y concepción chinos del Estado de derecho se coordinen y alineen con los principios y conceptos internacionales sobre la lucha antiterrorista; no solo ha prevenido y castigado eficazmente las conductas terroristas, sino que también ha respetado y garantizado concienzudamente los derechos humanos, adecuándose tanto a las realidades del país como a las prácticas internacionales y alcanzando excelentes resultados prácticos.

Lamentablemente, algunos países frecuentemente ignoran el derecho de los demás Estados a escoger por sí mismos el camino del imperio de la ley en su lucha antiterrorista e intentan

imponer su propia voluntad a los demás. Tales países emiten juicios de valor sobre las prácticas de los demás, e incluso interfieren en sus asuntos internos y violan su soberanía, *so pretexto* de defender el “Estado de derecho” y los “derechos humanos”; así, gravemente obstaculizan el proceso de imperio de la ley de la lucha antiterrorista internacional, debilitan las bases de la cooperación internacional en esta materia y afectan negativamente sus logros.

Los hechos demuestran que las exploraciones y prácticas de cada país, en la medida en que puedan encarnar los valores de la sociedad humana, obedezcan los principios y normas antiterroristas de la ONU y se adecúen a la situación y sistema jurídico nacionales, forman parte de los esfuerzos internacionales del combate del terrorismo bajo el imperio de la ley. En la lucha contra el terrorismo, la comunidad internacional debe apoyar diversas medidas basadas en la ley, rechazar los dobles raseros y oponerse a la politización de las cuestiones conexas.

Bajo la concepción de comunidad de destino de la humanidad, China está dispuesta a cooperar con todos los países del mundo en la gobernanza mundial antiterrorista y, sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo, el país impulsará ampliamente el aprendizaje recíproco, el intercambio y la cooperación, a fin de promover conjuntamente el sano desarrollo de los esfuerzos internacionales en la lucha contra el terrorismo.

